

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

SENTENCIA DE TUTELA NO. 88

Declarada la nulidad del fallo de fecha 09 de abril de 2021 por el **JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO** a través de providencia de fecha 13 de mayo de 2021 y proferido auto que ordenó estarse a lo dispuesto por el superior, el Juzgado ordenó notificar nuevamente a la **EPS COSMITET**, y una vez cumplido esto, se apresta nuevamente el Despacho a proferir la decisión que en derecho corresponde sobre la acción de tutela instaurada por la señora **MARÍA SALOME CARTAGENA MARIN**, en contra de **LA EPS COSMITET LTDA., DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL**, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la vida, salud, trato digno y seguridad social.

I. ANTECEDENTES

Manifiesta la accionante que se encuentra afiliada a **COSMITET LTDA**, en calidad de beneficiaria, de su padre Hernán Cartagena Franco, quien es docente activo y presta sus servicios en la Secretaría de Educación Departamental.

Que desde el mes de noviembre de 2020 fue diagnosticada con **leucemia mieloide aguda**, enfermedad denominada catastrófica según la resolución 5261 de 1994 y desde entonces está siendo tratada por los especialistas en hematología, siendo sometida a cuatro sesiones de QUIMIOTERAPIA.

Refiere que el día **07 de enero de 2021** fue remitida por el especialista en hematología, para ser valorada por **HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA**, como consta en historia clínica y **solicitud de servicio 1243598**, orden que fue **radicada el día 14 enero de 2021 en COSMITET LTDA.**, sin que a la fecha hayan emitido respuesta alguna.

Que de igual forma, el día **26 de febrero de 2021** nuevamente fue remitida a **GRUPO DE HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA**, y fue solicitado por el especialista el **ESTUDIO DE HLA** las cuales fueron radicadas ante la **EPS COSMITET** sin que a la fecha haya obtenido respuesta positiva de la entidad.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la premura de los especialistas por el estudio , ya que debía realizarse antes de iniciar la cuarta quimioterapia para la realización de un futuro trasplante de médula ósea y ante la negligencia y negativa de la **EPS COSMITET**, se vio en la necesidad imperiosa de sufragar el estudio **HLA** en un laboratorio particular de razón social LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ CORREA SA, por un valor de dos millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte (**\$2.940.000**), como consta en la factura electrónica de venta número **LCCR 2439**, la cual anexan.

Anota que de no realizarse el trasplante de médula en el tiempo estipulado tras terminada la cuarta quimioterapia y realizado el aspirado de médula de control, temen los especialistas que los niveles de su cuerpo podrían no estar preparados de nuevo para un trasplante sino hasta realizar una nueva quimioterapia y que los riesgos que conlleva realizar una nueva quimioterapia son: fatiga, dolor, pérdida del apetito, estreñimiento, náuseas, vómito, diarrea, infecciones, fiebre, flebitis, hemorragia severa, anemia, trombocitopenia, pancitopenia, neutropenia, pérdida del equilibrio, temblores, disminución de la fertilidad o infertilidad, afecciones cardíacas, daños en los órganos, menopausia precoz, osteoporosis y muerte súbita, entre otros.

Dice que cada sesión de quimioterapia le ha implicado una baja en los niveles hemodinámicos, por lo que ha requerido innumerables transfusiones de plaquetas y sangre, sin contar con los ciclos de antibióticos de amplio espectro que han sido necesarios para evitar infecciones y combatirlas, lo que en varias oportunidades la han tenido que trasladar a las unidades de cuidados intensivos **UCI**.

Finaliza diciendo que el tratamiento sólo es curativo si se lleva a cabo el trasplante de médula ósea y por su edad de 21 años, la probabilidad de que reaparezca el cáncer sin el trasplante es demasiado alta según los especialistas tratantes.

II. PRUEBAS

Aportadas por la accionante: Copia de autorización de servicios de salud (estudio HLA), Copia de autorización de servicios de salud (GRUPO DE HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MEDULA), copia de historia clínica, copia de cedula de ciudadanía, Copia de factura expedida por laboratorio López Correa, copia de autorización de servicios de salud (consulta con especialista en hematología), copia de epicrisis de fecha de 30 de octubre de 2020.

Aportadas por la **EPS COSMITET**: con la contestación de la acción de tutela, se aportó la Historia Clínica de la accionante y las constancias de consulta externa con la especialidad hematológica.

Aportadas por **LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**: con la contestación no se aportaron otros documentos.

Aportadas por la **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**: con la contestación se aportaron cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y resolución.

III. TRÁMITE

Mediante auto fechado 19 de mayo de 2021 en virtud de la nulidad decretada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a las entidades accionadas, para que se sirvan dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitara las pruebas que pretenda hacer valen para su defensa.

IV. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

La entidad accionada **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**, dio respuesta al requerimiento, manifestando que dicha entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, en tanto la responsabilidad recae sobre la EPS COSMITET, ya que sus funciones dentro de sus funciones están: la celebración de contratos de prestación de servicios de salud con IPS públicas y privadas, para la atención en el nivel especializado (II y III) de personas clasificadas en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén no afiliadas a ARS ó EPS (pobres no afiliados).

Que la atención integral en salud que llegare a requerir la accionante debe ser asumido en su totalidad y sin ningún tipo de dilación por la EPS a la cual se encuentra afiliada la afectada.

Por la anterior solicita ser desvinculada en el presente asunto, ya que no es de su resorte lo que se plasmó en la acción de tutela.

La entidad accionada **EPS COSMITET** dio respuesta a la acción tuitiva manifestando que se aclaró la autorización y se programó la valoración requerida por la usuaria para el día 29 de abril de 2021 a las 8:00 am con el Dr. Juan Manuel Herrera Parga.

En este sentido refiere que se han adelantado toda clase de acciones estando frente a un hecho superado y por lo tanto se solicita denegar la acción de tutela.

La entidad accionada **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL** mediante respuesta manifestó al despacho que De los hechos de la demanda de tutela, se puede evidenciar que las situaciones narradas por parte de la accionante corresponden a su estado de salud y su interacción con La Corporación de Servicios Médicos Internacionales THEM & CIA Ltda COSMITET LTDA que escapan al campo de acción de esta Secretaría de Educación, teniendo en cuenta que no es la entidad llamada a prestar los servicios de salud requeridos por la accionante, con el fin de atender la enfermedad que le ha sido diagnosticada.

Refirió que la Ley 91 de 1989 creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta de la Nación, con el fin de administrar los recursos de seguridad social de los docentes afiliados, la cual incluye la prestación de los servicios de salud y el pago de sus prestaciones económicas y que de acuerdo con la norma atrás descrita, la Secretaría de Educación no es la encargada de realizar los giros correspondientes a la Seguridad Social de los docentes que hacen parte de la Planta docente de esta Secretaría, labor que es realizada por parte de la FIDUPREVISORA a la entidad prestadora de salud que para el departamento de Caldas corresponde a COSMITET.

Por ello, adujo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL la encargada de cumplir con lo solicitado por la actora.

V. PROBLEMA JURÍDICO.

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales constitucionales a la vida, salud, trato digno y seguridad social de la accionante por parte de la entidad accionada, al no realizar cita con el especialista en **HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA**, además de no cancelar los gastos en que tuvo que incurrir para la realización del examen HLA requerido para realizar una cuarta quimioterapia y se le conceda el tratamiento integral en su padecimiento.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VI. CONSIDERACIONES

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, en donde actuó como magistrado ponente el Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, expresa en el numeral 3.2.1., que **“La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud”**. Sentencia en el que retoma algunos aspectos sobre el carácter de derecho fundamental que jurisprudencialmente y doctrinariamente se le ha concedido al derecho a la salud consagrado constitucionalmente; es así como, este operador jurídico se adhiere a la posición adoptada por el máximo tribunal constitucional; así:

“...En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo.”

3.2.5. La jurisprudencia constitucional reconoció a través de la figura de la ‘conexidad’, casos en que la indivisibilidad e interdependencia de los derechos son manifiestas, a tal punto, que el incumplimiento de una obligación derivada de un derecho que no sea considerado una libertad clásica (como la salud), implica, necesariamente, el incumplimiento de la obligación derivada de un derecho que sí es clasificado como esencial (como la vida).

Pero la utilidad práctica de tal argumentación, ha sido cuestionada por la propia jurisprudencia. De hecho, recientemente la Corte consideró ‘artificial’ tener que recurrir a la ‘estrategia de la conexidad’ para poder proteger el derecho constitucional invocado. Dijo al respecto,

“Hoy se muestra artificial predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos fundamentales los cuales tienen todos – unos más que otros - una connotación prestacional innegable. Ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es decir, en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental. Así, a propósito del derecho fundamental a la salud puede decirse que respecto de las prestaciones excluidas de las categorías legales y reglamentarias únicamente podrá acudirse al amparo por vía de acción de tutela en aquellos eventos en los cuales logre demostrarse que la falta de reconocimiento del derecho fundamental a la salud (i) significa a un mismo tiempo lesionar de manera seria y directa la dignidad humana de la persona afectada con la vulneración del derecho; (ii) se pregona de un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) implica poner a la persona afectada en una condición de indefensión por su falta de capacidad de pago para hacer valer ese derecho.

Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. Para la jurisprudencia constitucional “(...) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud.” (Subrayado y cursiva fuera del texto).

También debe tenerse en cuenta, que el Estado colombiano expidió la ley estatutaria de la salud (Ley 1751 de 2015) sancionada por el señor presidente de la república, el día 16 de febrero de esa misma anualidad; disposición por medio de la cual se consagra la salud como derecho de carácter fundamental autónomo.

Tenemos entonces que la salud se reconoce no sólo a nivel interno en la Carta Magna y en su desarrollo por órganos del Estado, como lo son el propio ejecutivo y legislativo con la expedición de la ley estatutaria de la salud, sino también por la Honorable Corte Constitucional en sus providencias como un derecho constitucional inalienable; consideración que trasciende las fronteras; ello cuando a nivel internacional también se reconoce la salud como derecho fundamental.

Muestra de esa consagración, lo son el Pacto Internacional de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con toda esa regulación se busca el disfrute del más alto nivel en salud física y mental y el acceso a los avances científicos; debiendo en aplicación a ello, el Estado Colombiano buscar que el acceso a los servicios de salud, estén al alcance del grueso de la población, la cual por regla general, es la que se encuentra en condiciones de indefensión o debilidad manifiesta, ya por no tener alguna capacidad económica, ya por ser ésta muy limitada; en donde el Estado debe garantizarles sus derechos en condiciones de igualdad real y efectiva frente a los demás actores sociales.

Tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, “toda persona tiene derecho a que la entidad encargada de garantizarle la prestación de los servicios de salud, EPS, autorice el acceso a los servicios que requiere y aquellos que requiere con necesidad, incluso si no se encuentran en el plan obligatorio de salud; obstaculizar el acceso en tales casos implica irrespetar el derecho a la salud de la persona.”

De igual forma en sentencia T- 012 de 2020 La Corte Constitucional se ha referido respecto de la atención de enfermedades catastróficas así:

(...)De las consideraciones expuestas, esta Sala concluye que tratándose de personas que sufren de una enfermedad ruinosa o catastrófica, por disposición constitucional, y desarrollo legal,^[34] su derecho a acceder a los servicios de salud, se protege de forma especial. Lo anterior cobra mayor importancia cuando se trata de sujetos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, como es el caso de quienes sufren de enfermedades catastróficas, entre otras, como por ejemplo, todo tipo de cáncer. Así lo estableció de forma categórica el Legislador al indicar que las instituciones del Sistema de Salud, “bajo ningún pretexto podrán negar” la asistencia en salud (en un sentido amplio, bien sea de laboratorio, médica u hospitalaria; Ley 972 de 2005, Art. 3).^[35] Este mandato legal ha sido considerado y aplicado por la Corte en muchas ocasiones.^[36] En la actualidad, esta protección constitucional, amparada también por el Legislador, ha sido reforzada con la expedición de la Ley estatutaria sobre el derecho a la salud, que reconoce los elementos y principios esenciales e interrelacionados del derecho y la garantía de integralidad (Arts. 6 y 8 de la Ley 1751 de 2015)(...)

Las personas con sospecha o diagnóstico de cáncer merecen una protección constitucional reforzada: Alcance de los principios de integralidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud oncológicos.

(...) Como desarrollo del principio de igualdad material consagrado en el artículo 13^[46] constitucional, este Tribunal ha dispuesto reiteradamente que ciertas personas, debido a su estado de mayor vulnerabilidad y debilidad manifiesta, son sujetos de especial protección constitucional y, por lo tanto, merecedoras de especial protección en el Estado Social de Derecho.

Dentro de esta categoría, en desarrollo de los artículos 48^[47] y 49^[48] de la Carta, la jurisprudencia constitucional ha incluido a las personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas, como el cáncer^[49]. Por esta razón, ha dispuesto que esta población tiene derecho a protección reforzada por parte del Estado, la cual se traduce en el deber de brindarles acceso sin obstáculos y al oportuno tratamiento integral para la atención de su patología.(...)

En particular, sobre el alcance de esta protección, la Corte señaló en **Sentencia T-066 de 2012** lo siguiente:

“Esta Corporación ha sido reiterativa en su deber de proteger aquellas personas que sufren de cáncer, razón por la cual ha ordenado a las entidades prestadoras del servicio de salud autorizar todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que requiere el tutelante para el tratamiento específico e incluso inaplicar las normas que fundamentan las limitaciones al POS (...)” (Subrayas fuera del original)^[50].

18. Como se observa, una de las reglas decantadas por este Tribunal respecto de las personas que padecen cáncer u otras enfermedades catastróficas es el derecho que éstas tienen a una atención integral en salud que incluya la prestación de todos los servicios y tratamientos que requieren para su recuperación, sin que medie obstáculo alguno independientemente de que se encuentren en el Plan Obligatorio de Salud o

no^[51].

En suma, esta integralidad a la que tienen derecho esta clase de pacientes cuyo estado de enfermedad afecte su integridad personal o su vida en condiciones dignas, significa que la atención en salud que se les brinde debe contener “todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”^[52].

Lo anterior permite inferir que la integralidad comprende no solo (i) el derecho a recibir todos los medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico, tratamientos y cualquier otro servicio necesario para el restablecimiento de la salud física, conforme lo prescriba su médico tratante, sino también (ii) la garantía de recibir los servicios de apoyo social en los componentes psicológico, familiar, laboral y social que requieran los pacientes con cáncer para el restablecimiento de su salud mental^[53].

Además, que el servicio de salud que se les brinde debe ir orientado no solo a superar las afecciones que perturben las condiciones físicas o mentales de la persona, sino, también, (iii) “a sobrellevar la enfermedad manteniendo la integridad personal (...) a pesar del padecimiento y además de brindar el tratamiento integral adecuado, se debe propender a que su entorno sea tolerable y digno”^[54].

De igual forma la **Sentencia T-607 de 2016** se pronunció sobre el principio de integralidad respecto de las personas que padecen cáncer:

“(..) a toda persona que sea diagnosticada con cáncer se le deben garantizar los tratamientos que sean necesarios de manera completa, contin[u]a y, sin dilaciones injustificadas, de conformidad con lo prescrito por su médico tratante, así se evita un perjuicio irremediable en la salud y la vida del paciente”.

Por otro lado, este principio de integralidad tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y evitar al paciente interponer una acción de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por el médico tratante. Por ello, en desarrollo del mismo, el juez de tutela tiene la facultad de ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios “que el médico tratante valore como necesario[s] para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente”^[56]. Esta continuidad se materializa en que el tratamiento integral debe ser brindado “de forma ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad”.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.

La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye el fundamento objetivo del artículo 86 de la Constitución Política Nacional.

Este amparo conlleva a impartir una orden de inmediato cumplimiento, siendo este el mecanismo efectivo, cuando realmente sea necesario para superar el quebrantamiento de los derechos fundamentales.

De existir otro medio de defensa judicial, como puede ser la jurisdicción ordinaria, este impide la activación del amparo constitucional, mediante la acción de tutela, por ser este un mecanismo subsidiario y residual el cual no puede suplantar los instrumentos judiciales previstos para cada especialidad, sin embargo de manera excepcional pueda actuar este mecanismo con la condición de ser transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden, cuando el accionado desarrolla los actos necesarios para deshacer el agravio, es decir, observa y satisface las pretensiones del accionante mediante la actividad tendida, arriba a lo que la teoría constitucional ha denominado la carencia actual del objeto, por ser innecesario el pronunciamiento del juez a los planteamientos de fondo del escrito de tutela.

En este sentido la Corte se ha pronunciado indicando: *"ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz"*¹.

Las pretensiones satisfechas carecen de sentido dentro de la acción de tutela ya que:

*"(...) pierde su razón de ser cuando durante el trámite de/proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos, fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*², en otras palabras, si: *"previamente al pronunciamiento de/juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*³.

Sobre el particular, la Sentencia T- 154 de 2017, donde actuó como Magistrada Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa, dispone:

"De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta en tres hipótesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) cuando se presenta daño consumado, o (iii) cuando se está ante un hecho sobreviniente

En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que esta se presenta cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario." (Negrillas Propias.)

A su turno, la Sentencia T – 013 de 2017, donde actuó como Magistrado Ponente el Doctor Alberto Rojas Ríos, indicó que:

"No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial. (...) En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza

¹T-011 de 2016.

²T-970 de 2014.

³T-168 de 2008.

de los derechos fundamentales, en otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.” (Negrillas propias.)

I. CASO CONCRETO

La parte actora interpone este mecanismo sumarial, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, salud, trato digno y seguridad social, presuntamente vulnerados por la EPS COSMITET, al no realizar cita con el especialista en **HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA**, además de no cancelar los gastos en que tuvo que incurrir para la realización del examen denominado “ESTUDIO DE HLA” requerido para realizar una cuarta quimioterapia y se le conceda el tratamiento integral en su padecimiento.

La acción de tutela fue admitida y notificada a las accionadas, especialmente a la EPS COSMITET la cual manifestó que la cita con la especialidad de HEMATOLOGIAONCOLOGICA fue autorizada y programada para el día 29 de abril de 2021 a las 8:00 am con el Dr. Juan Manuel Herrera Parga.

La anterior circunstancia fue comprobada por el despacho por medio de documento que fuera enviado por la accionante mediante correo electrónico, en el que adosó información complementaria en donde además de plantear otras situaciones en su procedimiento médico, las cuales no son objeto de la presente acción de tutela, adujo que la EPS COSMITET ya había gestionado la valoración por HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA de la siguiente forma y de la que se extrae del documento:

Puesto que la institución cosmitet ya gestiono la valoración por hematología de trasplante, a la que me había remitido mi hematólogo de base, perteneciente a la EPS COSMITET, el Doctor Francisco Javier Meza Cadavid.

Valoración que se llevó a cabo en la clínica Imbanaco de la ciudad de Cali, por medio de dos secciones, una de manera presencial el día 29 de abril del 2021, y la otra por teleconsulta el día 13 de mayo del 2021, realizadas por el **DOCTOR JUAN MANUEL HERRERA PARGA** Hemato-Oncologo Clínico, quien de manera conjunta con el grupo de hematología de trasplante, han decidido que la mejor opción terapéutica para preservar mi vida es realizar un **TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA EN FORMA PRIORITARIA con donante intrafamiliar parcialmente compatible (haploidentico).**

Así las cosas, esta Juez Constitucional determina, que si bien es cierto existió una controversia que generó la reclamación por vía de acción de tutela, actualmente ha dejado de existir ante valorada por **HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA**; por lo que a este punto de la tutela resulta inútil e irrazonable ahondar más sobre el asunto, estando en tal sentido en el caso objeto en estudio, frente a una carencia actual de objeto por “Hecho Superado” y en consecuencia la acción de tutela impetrada carecería de eficacia y razón de ser, accediéndose a la petición entablada por la parte accionada.

Por consiguiente, al desaparecer los motivos por los cuales se interpuso la presente acción, resulta inocuo realizar cualquier tipo de consideración sobre lo pretendido, presentándose

sobre esta acción tuitiva el fenómeno de la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**, pues durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que dieron origen a la solicitud de amparo, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden puntual de protección⁴.

Ahora, respecto del tratamiento integral solicitado, es de anotar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la salud. La determinación de los mismos no corresponde al usuario, sino al médico tratante adscrito a la E.P.S.:

“(...) La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud (...)”

Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a garantizar su continuidad, y evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología. En consecuencia, una EPS, vulnera el derecho fundamental a la salud de una persona cuando presta un servicio en salud fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y demás procedimientos que la persona requiere para recuperarse o aminorar sus padecimientos, todos los cuales hayan sido prescritos por el médico tratante. No importa si algunos de los servicios en salud son P.O.S. y otros no lo son, pues las entidades e instituciones de salud son solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que indiquen quién debe asumir el costo y del reconocimiento de los servicios adicionales en que haya incurrido una entidad que garantizó la prestación del servicio de salud, pese a no corresponderle.

En el presente asunto es evidencia procesal que la accionada NO se encuentra suministrando los servicios de manera continua, pues nótese que además de tener que recurrir a la acción de tutela para la prestación del servicio de salud, también quedó demostrado en el plenario que tuvo que sufragar de su propio peculio, el examen denominado “ESTUDIO DE HLA” dejando así evidenciado que la EPS COSMITET no ha sido diligente en la prestación de los servicios de salud que ha requerido la accionante, a mas que se trata de una persona de especial protección constitucional, como se dijo en precedencia y la cual goza del principio de integralidad, como se recordará: “a toda persona que sea diagnosticada con cáncer se le deben garantizar los tratamientos que sean necesarios de manera completa, continua y, sin dilaciones injustificadas, de conformidad con lo prescrito por su

⁴ Sentencia T 059 de 2016 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

médico tratante, así se evita un perjuicio irremediable en la salud y la vida del paciente”, lo cual conlleva a que deba concederse el tratamiento Integral pretendido, en favor de la señora **MARÍA SALOME CARTAGENA MARIN**, pero única y exclusivamente sobre la patología denominada **LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA**.

Por último, y respecto a la solicitud de ordenar el reintegro del pago del examen denominado “ESTUDIO DE HLA” que fue sufragado por la accionante de manera particular, este despacho amparado en las reglas constitucionales ya antedichas, negará dicha pretensión, toda vez que dicho reembolso solo procede excepcionalmente cuando se cumpla en los casos que se iteran: (i) Cuando los mecanismos judiciales consagrados para ello no son idóneos. (ii) Cuando se niegue la prestación de un servicio de salud incluido en el Plan Obligatorio de Salud, sin justificación legal (iii) Cuando dicho servicio haya sido ordenado por médico tratante adscrito a la EPS encargada de garantizar su prestación;” los cuales no se ajustan a lo probado dentro de esta acción tuitiva, pues si bien fue aportada la factura que se pretende hacer valer, no existe evidencia que permita inferir que esta fue presentada ante la EPS COSMITET para su reembolso o que haya acudido ante la Superintendencia Nacional de Salud para su reclamo, y que estos se hubiesen negado, ni que exista riesgo de afectación clara al mínimo vital o alguna otra circunstancia que permita determinar al Despacho que los otros mecanismos judiciales con que cuenta la actora para satisfacer dicha petición no sean idóneos o adecuados.

Se ordenará igualmente la desvinculación de la **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** por no ser las entidades llamadas a cumplir con el fallo de tutela.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

RESUELVE

PRIMERO: PRIMERO: DECLARA que sobre la presente acción de tutela instaurada por **MARÍA SALOME CARTAGENA MARÍN**, en contra de la **EPS COSMITET, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** ha operado la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**, frente a la cita **HEMATOLOGÍA DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA**

SEGUNDO: CONCEDER tratamiento integral a la señora **MARÍA SALOME CARTAGENA MARIN**, pero única y exclusivamente de su patología denominada “LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA” ello conforme lo indicado en esta providencia.

TERCERO: NEGAR el reintegro del pago del examen denominado “ESTUDIO DE HLA” por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DESVINCULAR a **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** por lo dicho en precedencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

SEXTO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5c88eae71e5c0bf8687e7316b462949606e1b72fb13adf7e5826e2441155a092**

Documento generado en 27/05/2021 01:44:38 PM